

Situación de Iraq tras 10 años de guerra y ocupación

Tras 10 años de invasión y ocupación de Iraq, la población sigue sufriendo la destrucción de su país, de los servicios esenciales y de la sociedad. Aunque la ocupación militar directa de EEUU y Reino Unido haya acabado oficialmente con la salida de la mayoría de las tropas en diciembre de 2011, los ocupantes han dejado unas fuerzas de seguridad corruptas y violentas, un gobierno basado en el sectarismo y la división confesional, una Constitución ilegítima extremadamente regresiva en derechos y libertades civiles y que favorece la fragmentación territorial, un sistema judicial dinamitado y corrupto, y un proceso político que ahonda en las divisiones y en los privilegios de una nueva oligarquía corrupta y criminal nacida con la ocupación, frente a las carencias de la población. A ello se une la progresiva islamización impuesta por el gobierno de influencia iraní, que ha generado un claro retroceso de los derechos de la mujer. Iraq permanece así en un estado de tensión permanente. La sociedad vive mucho peor que antes de la invasión, con unos altos índices de inseguridad y pobreza y, mientras tanto, todo el dinero que genera el petróleo se está yendo a otras manos. Es evidente que la ocupación imperialista —ya sea militar, política o económica en cada fase de estos 10 años— ha destruido el país de Iraq; que tras 10 años de guerra e intervención, la ocupación continúa; y que es hora de exigir responsabilidades y justicia a la Corte Penal Internacional, de pedir cuentas a los gobiernos de todo el mundo por contribuir a este crimen o consentirlo.

Es hora también de apoyar las legítimas reivindicaciones del movimiento de protesta ciudadana que comenzó en Iraq el pasado 25 de diciembre de 2012 en Ramadí (en el oeste de Iraq), en principio exigiendo el respeto a la población sunní, pero que a medida que se ha ido extendiendo a otras ciudades (Samarra, Faluya, Tikrit, Mósul, Bacuba; y también aunque en menor medida a las provincias del sur, con mayoría chií, y del norte kurdo) ha ampliado los motivos de protesta, denunciando la situación de los miles de presas y presos, la mayoría sin cargos ni juicio y objeto de violaciones y torturas; exigiendo la no discriminación entre los iraquíes y el fin del sectarismo, y pidiendo claramente la derogación de la Constitución y el derrocamiento del régimen corrupto y criminal, en una lucha unitaria de todos los iraquíes por recuperar su soberanía y dignidad y el respeto de los derechos humanos.

Economía destruida y falta de servicios esenciales

Durante la invasión, las tropas de la coalición destruyeron huertos y campos de cultivo, infraestructuras energéticas y de transporte, plantas de tratamiento de aguas. Los presupuestos millonarios para reparar la red de suministro eléctrico y la red de agua fueron desviados finalmente para costear los gastos militares y de seguridad, con lo cual todavía en 2007 la mayoría de los iraquíes sólo tenían tres horas de electricidad al día y al menos la mitad de la población no tenía acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento.

La falta regular de electricidad y de agua potable en la mayor parte del país ha contribuido al incremento de las enfermedades (epidemias de cólera, infecciones intestinales, piedras en el riñón) y beber agua contaminada es la primera causa de enfermedad en los niños iraquíes.

Un año después de la invasión de Iraq, el desempleo alcanzaba el 70%, en 2008 era del 40% y 10 años después, aunque no hay datos fiables, son continuas las protestas ciudadanas por la escasez de empleo. Según el propio Ministerio de Planificación, el 23% de la población iraquí vive bajo el umbral de la pobreza, a pesar de que el país ha visto incrementados sus ingresos gracias a la exportación de petróleo. Estos datos no incluyen a los más de dos millones de refugiados iraquíes en el exterior, muchos de los cuales siguen sumidos en la miseria.

El aumento de la pobreza se refleja en el crecimiento de focos de chabolas en las ciudades de Iraq, donde la proporción de habitantes en estos barrios casi se ha triplicado, desde un 17%

en el año 2000 (2,9 millones de personas) hasta un estimado 53% en 2010 (10,7 millones de personas).

Las cartillas de racionamiento que el gobierno iraquí estableció en 1990 cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le impuso el duro régimen de sanciones económicas por la invasión de Kuwait, no sólo evitaron la hambruna generalizada en el país durante más de una década de sanciones sino que permitieron que el pueblo iraquí pudiera afrontar los seis primeros meses de ocupación en 2003 gracias al adelanto que el gobierno efectuó de los cupones correspondientes. Estas cartillas seguían siendo el único medio de subsistencia para seis millones y medio de iraquíes un año después de la invasión, e incluso los iraquíes más pobres frecuentemente comerciaban con el contenido de esas cartillas para cubrir sus necesidades desesperadas de medicamentos y ropa. Hace unos meses el gobierno de Nuri al-Maliki intentó eliminar la cartilla pero las protestas sociales le obligaron a dar marcha atrás en la medida.

Las empresas contratistas de los países ocupantes, los mercenarios y los subcontratistas locales han saqueado el país, mientras a la población se le niega el agua potable y la electricidad, e incluso el petróleo, pues las mujeres tienen que hacer colas diarias durante horas para obtener queroseno con que cocinar.

Los planes del gobierno de Bush de instaurar en Iraq un sistema capitalista ultraliberal y de convertirlo en un país recolonizado y sometido al control militar, político y económico estadounidense se hicieron evidentes al poner a Paul Bremer al frente de la Autoridad Provisional de la Coalición en mayo de 2003. Él se encargó de sentar las bases para la profunda transformación política, económica y sociocultural que exigía dicho plan y, de hecho, todas sus disposiciones se han mantenido vigentes en los posteriores gobiernos iraquíes. Es así como despidió a cientos de miles de trabajadores del sector público causando una tasa de desempleo del 70%; liberalizó el comercio anulando los aranceles que protegían a los productores locales frente a las grandes corporaciones estadounidenses; dictó decretos que permitían la privatización de todos los recursos, empresas y servicios públicos; facilitó las inversiones extranjeras; redujo considerablemente los impuestos más altos, etc.

En el gobierno salido de las elecciones de 2005, el grueso de las carteras de economía quedaron en manos de los partidos confesionales chiíes, abiertamente proclives a la transformación capitalista de la economía iraquí y a la apertura del sector petrolero a las inversiones extranjeras.

Corrupción y sectarismo en el gobierno

Desde el primer momento de la ocupación, tanto la Autoridad Provisional de la Coalición, a cuyo frente se hallaba Paul Bremer, como el gobierno interino de Iyad Alawi en el traspaso de poder y los gobiernos salidos de las sucesivas elecciones, todos ellos se han caracterizado por las prácticas de corrupción y de asignación de cargos a familiares y personas cercanas, dentro de la lógica sectaria y confesional de reparto de cuotas de poder impuesta por los ocupantes como modo de funcionamiento del proceso político interno iraquí. Este saqueo de las arcas públicas a través de los puestos políticos explica el elevado número de ministros que conforman los gobiernos iraquíes habidos (37 carteras en el gobierno formado en 2006 y 43 en el gobierno actual, en ambos casos con ministerios aún pendientes de adjudicar) así como la tardanza en formar gobierno tras las elecciones por la dificultad de satisfacer todos los intereses en juego (más de cinco meses tras las elecciones de 2005 y más de ocho meses por la negativa del primer ministro Nuri al-Maliki de aceptar su derrota en las últimas elecciones de marzo de 2010).

Además, la progresiva injerencia del gobierno de Irán en la política y economía de Iraq ha venido de la mano del sectarismo confesional promovido por EEUU durante la ocupación como estrategia para dividir a la sociedad iraquí y hacer más fácil su sometimiento. Posteriormente, EEUU quiso rectificar y, así, en la composición del gobierno de 2006 intentó limitar la hegemonía del confesio-

nalismo político chií y, a través de éste, la influencia iraní en el país, presionando a al-Maliki para que asignase carteras a los partidos sunníes, pero con escaso resultado pues el control iraní de los asuntos internos iraquíes es casi absoluto. Como también ha fracasado en sus intentos de dividir por etnias o confesiones a la población y de fragmentar su territorio, pues los 4.000 años de historia de convivencia de varios pueblos y civilizaciones marcan fuertemente la identidad cultural del pueblo iraquí como una sola entidad socioeconómica y geopolítica.

La enorme corrupción, la falta de servicios públicos esenciales (electricidad, agua potable, alcantarillado) y el elevado desempleo motivaron las protestas populares que estallaron en febrero de 2011 en las principales ciudades del país. El silencio que los medios de comunicación impusieron sobre esta primavera árabe —mientras daban cobertura a las revueltas de Túnez, Egipto, Bahreín— permitió que la represión del gobierno acabase con las múltiples manifestaciones del pueblo iraquí.

Sin embargo, el nuevo estallido social que desde el 25 de diciembre de 2012 ha venido creciendo y extendiéndose a todo el país al tiempo que ampliaba los motivos de la protesta, reclama como su principal reivindicación el derrocamiento del régimen corrupto y criminal, fruto de la ocupación internacional y la injerencia iraní, y la anulación de la Constitución impuesta por los estadounidenses.

Pese a los intentos del gobierno de presentar estas revueltas como sectarias, se trata de una lucha unitaria de todo el pueblo iraquí por recuperar su soberanía y dignidad, como lo demuestra el hecho de que hayan recibido mensajes de apoyo y delegaciones de todo el país incluso de las provincias del sur, de mayoría chií, donde el control de las milicias proiraníes es mayor. Los partidos representados en el gobierno han querido manipularlas según sus intereses sectarios: los partidos chiíes, apoyados por Irán y con el primer ministro Nuri al-Maliki a la cabeza, intentaron hacer ver que eran simples reivindicaciones sunníes, con el objetivo de desvirtuar el sentido de la protesta, frenar su avance y confundir a la opinión pública internacional; los partidos sunníes presentes en el gobierno también quisieron presentarlas así, en su caso con el propósito de ponerse al frente de ellas y afianzar su liderazgo, pero lo que han conseguido es perder su credibilidad y respeto ante sus electores.

Inseguridad física y legal

Los cientos de miles de muertos que produjo la cruenta invasión y los primeros años de ocupación, a los que se añaden los múltiples asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y milicias confesionales de los diversos partidos sectarios en el poder, especialmente en los trágicos años 2006-2007 cuando se asesinaba a cerca de 100 personas al día, así como los asesinatos selectivos de académicos y profesionales altamente cualificados, que a día de hoy se siguen produciendo, dan un balance estremecedor de más de un millón y medio de muertos. A todo ello se suma la inseguridad permanente de la población, que ni en sus casas ni en la calle puede garantizar su integridad física, y más aún en el caso de las mujeres.

En épocas de elecciones o de cambios políticos (como fue la salida de las tropas estadounidenses a finales de 2011) se recrudecen los asesinatos de civiles y los atentados efectuados por las milicias armadas de los partidos sectarios, que dirimen así sus diferencias a costa de la población.

Esta situación se agrava con la desprotección legal que sufren los iraquíes por el propio sistema judicial bajo el régimen de ocupación. Es dramática la situación de los miles de presas y presos, la mayoría sin cargos ni juicio y ninguno con las debidas garantías procesales, pues las declaraciones de los detenidos se obtienen mediante torturas, los procesos judiciales son una pura farsa y en las cárceles se produce todo tipo de abusos, torturas, violaciones, sobornos y corrupción, incluidos los rescates solicitados a los familiares de los detenidos a cambio de su liberación o de suavizar el trato carcelario. La impunidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad es una constante y la pena de muerte se sigue aplicando.

Desde el primer momento, las fuerzas de ocupación actuaron siguiendo un manual de instrucciones para tratar a los detenidos, y fueron estas fuerzas estadounidenses y británicas las que entrenaron a su vez a las fuerzas iraquíes. Tras el escándalo de Abu Graib, las personas presas fueron entregadas a las fuerzas iraquíes, con lo cual siguieron siendo torturadas pero el ejército de ocupación podía negar toda responsabilidad en ello, aunque muchos de estos abusos sucedieron bajo la supervisión de los comandantes estadounidenses.

Abogados y asociaciones de derechos humanos han denunciado el uso sistemático del maltrato y la tortura por parte de las fuerzas iraquíes de los ministerios de Interior y de Defensa, que aplicaban también a mujeres y niños, muchas veces con resultado de muerte.

Destrucción del sistema sanitario

Si ya el sistema sanitario se había ido degradando durante el período de sanciones, el bombardeo y saqueo de hospitales durante la invasión de 2003, el asesinato de médicos y profesionales sanitarios y el poco dinero asignado a la reconstrucción de los centros sanitarios hicieron que ya en 2004 diversos informes hablasen del colapso del sistema público de salud iraquí. A ello se unió el exilio forzoso de gran número de profesionales ante la falta de seguridad, intensificado aún más durante la escalada de asesinatos de limpieza étnica y confesional de 2006-2007. Muchos hospitales de diferentes ciudades fueron atacados por las fuerzas estadounidenses en 2006 y los enfermos evitaban ir al hospital por miedo a los disparos. El Ejército del Mahdi secuestró y asesinó a enfermos y heridos dentro de los hospitales públicos e interceptó ambulancias, actuando con total impunidad.

La falta de medios y medicamentos para tratar enfermedades comunes y accidentes ha provocado miles de muertes evitables, sobre todo de niños, mientras carísimos equipos de alta tecnología están abandonados en almacenes. Millones de dólares asignados a empresas estadounidenses para reconstruir la infraestructura sanitaria iraquí han desaparecido, mientras se marginaba a las agencias de Naciones Unidas con experiencia, como es el caso de UNICEF y de la OMS.

El premeditado plan estadounidense de acabar con los servicios públicos explica la desidia y el desvío de dinero en la reconstrucción, por lo que muchos centros sanitarios han pasado a ser gestionados por facciones religiosas o políticas que deniegan el servicio sanitario a determinadas personas siguiendo criterios sectarios o confesionales, como es la negación del derecho de la mujer al control de natalidad.

Los asesinatos de médicos siguen produciéndose (a finales de 2012 hubo otro caso al norte de Bagdad), sin que el gobierno de Nuri al-Maliki tome ninguna medida para garantizar su seguridad y se están trayendo profesionales sanitarios de la India y de otros países, cuando el desempleo en Iraq es considerable y los estudiantes iraquíes no acceden al mundo laboral.

Enfermedades producidas por el armamento utilizado

El uso de armamento prohibido por la legislación internacional, como el fósforo blanco y el recubrimiento de uranio empobrecido, durante más de dos décadas en Iraq —desde la guerra del Golfo de 1991, pasando por los bombardeos del período de sanciones que duró 13 años y que acabó con la brutal invasión en 2003, seguida por un continuo estado de guerra contra la resistencia iraquí—, ha provocado un elevado incremento de enfermedades crónicas, abortos, malformaciones congénitas y cáncer en la población iraquí.

El aire, la tierra y el agua están contaminados por estas armas químicas y el uranio empobrecido, que al entrar en contacto con el ser humano resultan venenosos, según han demostrado numerosos estudios médicos y científicos.

Una cuarta parte de los lugares contaminados corresponde a las zonas cercanas a Faluya y Basora, dos ciudades que fueron especialmente castigadas por los ataques estadounidenses, la primera

durante dos intensas campañas militares en 2004 y la segunda durante la guerra del Golfo de 1991. Un informe de 2010 afirmaba que desde 2003 las malformaciones congénitas se observaban en el 15% de todos los nacimientos habidos en Faluya e incluyen desde cardiopatías a graves malformaciones físicas (protuberancias en la espalda, falta o exceso de miembros, un ojo en medio de la cara, cabezas enormes, etc.). La mayoría de estos bebés mueren al poco de nacer. Otro estudio británico de julio de 2010 mostraba que el cáncer infantil en Faluya había aumentado 12 veces desde los ataques de 2004. La doctora Samira Alaani, pediatra del Hospital General de Faluya, que ha investigado esta proliferación de casos, se reunió a finales de 2011 con médicos japoneses que estudian la incidencia de malformaciones congénitas relacionadas con la radiación de los bombardeos nucleares estadounidenses de Hiroshima y Nagasaki, y comprobó que la tasa de malformaciones congénitas en Faluya, cifrada en el 14,7%, supone más de 14 veces la tasa de las zonas afectadas de Japón.

Además, las minas terrestres y las submuniciones de las bombas de racimo sin explotar han causado amputaciones y muerte a una cuarta parte de los niños menores de 14 años.

Graves perjuicios para la infancia

Si ya en los 13 años de sanciones económicas la mortalidad infantil se había multiplicado por tres, con un total de medio millón de muertos menores de cinco años, la invasión de 2003 y la ocupación han tenido efectos devastadores. El 39% de los muertos a consecuencia de los ataques aéreos realizados por la coalición dirigida por Estados Unidos eran niños. En sólo un año desde la invasión, la malnutrición aguda infantil se había duplicado, con la consiguiente vulnerabilidad a enfermedades infecciosas, que se ven agravadas por beber agua contaminada, hasta el punto de ser ésta la mayor causa de mortandad entre los menores de cinco años. Asimismo, la malnutrición crónica genera atrofia en su desarrollo físico y retrasos irreparables en su desarrollo mental. La situación de violencia por la larga guerra en estos años de ocupación también ha hecho que los niños y niñas padezcan traumas y problemas psicológicos (ansiedad, miedos, insomnio, pesadillas, alteraciones de conducta, depresión).

La pobreza generalizada ha provocado que muchos niños abandonen el colegio para ayudar económicamente a la familia. UNICEF calcula que uno de cada nueve niños de entre cinco y 14 años trabaja, en su mayoría de limpiabotas, vendiendo por las calles o empujando carros. El tráfico sexual de niñas menores de 16 años se ha disparado y representan el 65% de las mujeres prostituidas.

Grave deterioro del sistema educativo

Durante el mandato del Partido Baaz hubo grandes avances en el sistema educativo de Iraq. En 1974 se declaró la libertad de educación en todos los niveles y en 1979 se convirtió en obligatoria para las niñas y niños hasta la edad de 12 años. A comienzos de los años noventa, Iraq tenía la tasa de alfabetización más elevada del mundo árabe.

Con los duros años de sanciones económicas, el sistema educativo se resintió: faltaba material escolar, deterioro de las infraestructuras, etc. Un informe de UNICEF de 2004 reveló que, desde el inicio de la guerra estadounidense contra Iraq, unas 900 escuelas de enseñanza primaria resultaron dañadas por los bombardeos o ardieron, mientras que otras miles de ellas fueron saqueadas. Como en otras áreas, el dinero destinado a su reconstrucción se desvió a cuestiones militares y de seguridad, además de lucrar a las empresas contratistas e intermediarios. A comienzos de 2006, alrededor de una cuarta parte de los niños iraquíes no tenían acceso a la educación.

El deterioro de la educación superior es también manifiesto. Desde la invasión de 2003 hasta julio de 2012 se ha asesinado a 318 profesores universitarios, de diversas disciplinas y de todas las confesiones y tendencias políticas, en lo que parece ser una campaña premeditada de destrucción de la riqueza cultural y académica de Iraq. Otros muchos docentes han sido amenazados de muerte y miles de ellos han huido del país.

El sectarismo, el fundamentalismo religioso y la corrupción han entrado de lleno en las universidades. Así, más de 30.000 funcionarios iraquíes, entre ellos altos cargos, han obtenido sus empleos con certificados y títulos falsos, como es el caso del propio ministro de Educación Superior e Investigaciones Científicas, Ali al-Adib, quien ha despedido a unos 1.200 profesores desde que tomó posesión del cargo y, además, quiere aplicar la ley islámica en las universidades iraquíes mediante la imposición del sectarismo, el velo y la separación de sexo. Las actuales autoridades iraquíes mantienen una política de exclusión de los profesores con mayor experiencia y de sustitución con personas afiliadas a determinados partidos o con falsa titulación.

Pérdida de derechos de las mujeres

Las mujeres iraquíes habían sido durante mucho tiempo las más liberadas de Oriente Próximo. Participaron en la revolución de 1920 contra la ocupación británica; en la década de los cincuenta crearon organizaciones de mujeres dentro de los partidos políticos y al combatir junto a los hombres lograron que tras la revolución de 1958, que acabó con la monarquía impuesta por los británicos, alcanzasen lo que en 30 años de ocupación británica no habían conseguido: la igualdad legal. En los años setenta, ya bajo el régimen de Saddam Huseín, la mujer pudo acceder a la universidad y en los noventa había más mujeres profesionales en puestos de poder que en casi cualquier otra nación de Oriente Próximo.

En una década, la destrucción causada por la ocupación extranjera y el consiguiente régimen impuesto ha tenido un enorme impacto en la vida diaria de las mujeres. La política seguida por el régimen sectario y confesional está socavando los derechos que las iraquíes se habían ganado con tanto esfuerzo: en el empleo, en la libertad de movimientos, en el matrimonio civil, en los servicios sociales, en el acceso a la educación y a la sanidad.

Antes de la ocupación, las mujeres iraquíes representaban el 40% de los trabajadores del sector público; un año después, la mayoría estaban desempleadas. La pobreza generalizada, debida al elevado desempleo de la población, ha aumentado la prostitución, los abortos clandestinos y los asesinatos de mujeres por causa de honor. Durante la década de 1990, el número de mujeres que formaban parte del profesorado de las universidades iraquíes y de los centros de investigación era más del 30% del profesorado total. Después de 2003, el analfabetismo femenino ha superado el 50% en la mayoría de las provincias de Iraq y el 85% de las mujeres iraquíes con estudios está en paro. De toda la población iraquí, el 23%, unos siete millones de personas, vive por debajo del umbral de pobreza y más de la mitad son mujeres.

Desde el comienzo de la invasión, cientos de mujeres han sido objetivos militares y han resultado asesinadas por ser profesionales o por su papel público en Iraq. Además, la premeditada destrucción de la seguridad y del orden público trajo consigo un aumento de los casos de secuestro, violación y esclavitud sexual de niñas y mujeres. El miedo de las familias hizo que muchas niñas y adolescentes fueran sacadas de los centros educativos para que no tuvieran que salir a la calle, con lo que se convirtieron en prisioneras en sus propias casas; además, toda mujer debe salir siempre con un acompañante masculino.

Del millón largo de viudas por tantos años de guerra, sólo una sexta parte recibe ayudas sociales irrisorias (entre 34 y 81 dólares al mes) que no cubren las necesidades familiares y se ven obligadas a trabajar de sirvientas, prostituirse o mendigar.

La profunda injerencia de Irán en Iraq —no sólo en el gobierno apoyando a los partidos chiíes, sino en todos los campos: la universidad, la economía, el sistema jurídico— ha expulsado a la mujer de muchos ámbitos sociales (educativo, profesional, político, judicial) y ha agravado el retroceso de sus derechos.

En palabras de Layla [no se cita el apellido por seguridad], integrante de una asociación de mujeres kurdo-iraquíes que ayuda a las viudas, huérfanos y desplazados, el número de suicidios de mujeres ha aumentado en el Kurdistán y “[...] En el resto del país la situación es desesperada. Ahora todas las mujeres tenemos que llevar velo si no queremos arriesgar nuestra vida. Antes de la invasión esto no era así”.

A lo largo de estos 10 años de ocupación, las fuerzas de seguridad, tanto de los ocupantes como del gobierno iraquí, han detenido y utilizado sistemáticamente a las mujeres como rehenes para forzar a sus maridos, padres o hermanos a entregarse o a confesar los delitos que se les imputaban. Han sido torturadas y violadas en las cárceles, lo cual las condena de por vida en una sociedad donde el honor es un valor sagrado. Así, el honor de una mujer queda en entredicho por el mero hecho de haber pasado por la cárcel, y muchas mujeres han sido repudiadas, se han suicidado o incluso han sido asesinadas por sus propias familias.

Precisamente, la difícil situación de las mujeres detenidas fue el detonante de las multitudinarias protestas que se han extendido por muchas provincias iraquíes desde el 25 de diciembre de 2012. En las pancartas que llevan los cientos de miles de manifestantes se ven fotografías de mujeres encarceladas que reclaman justicia. Según el diputado iraquí Mohamed al-Dainy, entre 2003 y 2007 se produjeron 1.053 casos documentados de violación de mujeres a manos de las tropas ocupantes y de las fuerzas iraquíes.

La mayor crisis de refugiados en el mundo

Cinco millones de iraquíes han huido de sus hogares para escapar de la violencia. De ellos, la mayoría han huido a los países vecinos, sobre todo a Jordania y Siria, mientras que unos dos millones han abandonado sus casas para ir a zonas más seguras dentro de Iraq, especialmente desde que se desató la violencia sectaria en 2006. En Oriente Próximo, países como Egipto, Líbano, Yemen, Irán y Turquía también han recibido crecientes flujos de refugiados iraquíes. En enero de 2007, ACNUR señalaba que el 40% de la clase media iraquí había abandonado el país.

En pocos años, las cifras totales de desplazados iraquíes, tanto internos como externos, han superado incluso las de palestinos en varias décadas. Sin opciones de trabajo legal en los países de acogida y sin posibilidades reales de regresar a sus lugares de origen con una mínima garantía para sus vidas, el problema que afrontan los refugiados iraquíes es verdaderamente grave, sobre todo el millón de refugiados que se quedaron en Siria y que ante la ola de violencia que sacude el país deben decidir si volver a Iraq o soportar otra guerra.

El papel de la resistencia

Desde el comienzo de la invasión en 2003, las tropas de la coalición internacional tuvieron que enfrentarse a grupos de resistencia armada, que desbarataron sus planes de rápido sometimiento del pueblo iraquí. El amplio respaldo popular a la resistencia —en gran parte motivado por la propia violencia de las fuerzas ocupantes y por el expolio que hicieron de sus recursos mientras privaban a la población de servicios y derechos básicos— contribuyó decisivamente al fortalecimiento y efectividad de los distintos grupos de resistencia armada en sus acciones contra las tropas ocupantes y las empresas extranjeras de seguridad. A la vez se fue creando una sólida resistencia civil en torno a colectivos y organizaciones sociales de defensa de los derechos, ya fueran laborales, de las mujeres, de los prisioneros, etc.

A pesar de que el gobierno de Bush y los sucesivos gobiernos iraquíes colaboracionistas han tildado públicamente a la resistencia armada de terrorismo vinculado a al-Qaeda o posteriormente a milicias confesionales, para justificar la presencia y ampliación de las tropas de ocupación y la actuación de los escuadrones de la muerte de los partidos gubernamentales en aras de la seguridad y

el orden, lo cierto es que, lejos del sectarismo de las milicias confesionales y de la oscura trama de al-Qaeda, la resistencia iraquí, tanto militar como civil y política, lucha por un Iraq liberado, unido y soberano, gobernado por un nuevo régimen democrático e integrador que garantice los derechos civiles y sociales de todos los iraquíes, independientemente de su confesión, etnia o ideología, con una gestión pública de sus recursos.

La ilegalidad de la guerra y ocupación de Iraq

Tras el tremendo sufrimiento humano de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estableció una legalidad internacional y una ley de derechos humanos que sirvieran de base a las sociedades civilizadas. El imperialismo estadounidense, además de iniciar una guerra ilegal al invadir Iraq con falsos argumentos, ha mostrado un total desprecio a la legalidad internacional, que ha incumplido con absoluta impunidad.

1. Las leyes internacionales prohíben que los ocupantes establezcan cambios cuyo objetivo sea la alteración permanente de las estructuras básicas del Estado iraquí, incluidos sus instituciones judiciales, económicas, políticas y su tejido social. Por este motivo no sólo son ilegítimos la Constitución y el Parlamento fruto de la ocupación liderada por EEUU, sino que todas las leyes, tratados, acuerdos y contratos firmados en Iraq desde el inicio de la ilegal invasión y ocupación que la siguió, son ilegales.
2. El Derecho Internacional prohíbe a los poderes ocupantes, en este caso a la ocupación capitaneada por EEUU, la firma de contratos a largo plazo sin la autorización de un gobierno iraquí soberano que represente la soberanía del pueblo iraquí. Dado que, por definición, no puede existir un gobierno independiente sometido a una ocupación, cualquier intento de vincular el futuro del petróleo iraquí a las multinacionales extranjeras es ilegal y nulo.
3. La legislación internacional prohíbe a la ocupación liderada por EEUU el promover o permitir la división de Iraq en entidades federales, como es su pretensión desde el mismo inicio de la ocupación para así controlar mejor los recursos y domeñar a la población. Es, asimismo, ilegal que la ocupación suscite y fomente conflictos étnicos y sectarios con el fin de llevar a cabo políticas opuestas a los intereses del pueblo iraquí.
4. Habiendo fracasado las políticas de la ocupación, las autoridades de ésta no tienen derecho alguno a intentar someter a los iraquíes mediante la fuerza. Las operaciones de castigo que afectan indiscriminadamente a los civiles de ciudades enteras son ilegales y condenables según las leyes internacionales, así como el uso de armas prohibidas y el no reconocer a los combatientes de la resistencia como tales.
5. La campaña de asesinatos, torturas, violaciones y terrorismo contra los ciudadanos de Iraq, incluidas las actuaciones de los escuadrones de la muerte financiados y entrenados por EEUU, constituyen un crimen de genocidio según la Convención sobre Genocidio de 1951. El fracaso de las fuerzas de ocupación, lideradas por EEUU, en proteger, tal como les obligan las leyes internacionales, el derecho a la vida y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos iraquíes constituye un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad.
6. Sólo la resistencia popular nacional —armada, política y civil— tiene la autoridad, de acuerdo con el Derecho Internacional y especialmente con la Carta de Naciones Unidas, para decidir la vía hacia la paz y la estabilidad en Iraq. Ningún otro actor, y en ningún caso los políticos títeres instalados por EEUU, pueden hablar en nombre de los iraquíes o representar a la República de Iraq.

Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq (CEOSI)

www.iraqsolidaridad.org

Marzo de 2013